



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA CIVIL

Medellín, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2.023)

Magistrado: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
APELACIÓN DE AUTO: 05001 31 03 020 2022 00077 02

Proceso: Declarativo - resolución de contrato.
Demandante: CLÍNICA ESPECIALISTAS DEL POBLADO - CIRUPLAN S.A.S.
Demandados: FOREMP SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. y HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ VERA.
Extracto: Dada la naturaleza declarativa del asunto, y sin que se tenga decisión de fondo debidamente ejecutoriada (artículo 302 C. G. del P.), procede la inscripción de la demanda, pero previa caución.

ASUNTO A TRATAR

Se resuelven los recursos de apelación presentados contra los autos calendados el 26 de abril y el 30 de mayo, ambos de 2.023, proferidos por el JUZGADO VEINTE CIVIL DEL CIRCUITO de Medellín, en cuanto a medidas cautelares se refiere¹.

ANTECEDENTES

Dentro del referenciado el 2 de marzo de 2.023 se profirió sentencia primera instancia², y con posterioridad la parte demandante deprecó el

¹ La parte actora apeló el auto calendado el 26 de abril, mientras por pasiva se presentó alzada en relación al del 30 de mayo.

² Ver archivo 48 1ª instancia, luego adicionado en providencia del 7 de marzo siguiente, la que fue declarada sin valor en auto del 14 de abril hogaño en cuanto a la responsabilidad y condena del codemandado HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ VERA.

embargo y secuestro de los inmuebles identificados con Matrículas Inmobiliarias (M.I.) 50S-40780388, 50N-20882739 y 50N-20882738, de los que dijo son propiedad del codemandado HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ VERA; subsidiariamente, pidió inscribir la demanda³.

El 26 de abril de 2023 se negó tal pedido cautelar⁴, a lo que la demandante presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación, sosteniendo, en síntesis, que la sentencia le fue favorable, por lo que las cautelas son procedentes en los términos del inciso 2° literal b) del artículo 590 del C. G. del P., con lo que se garantizará el pago efectivo de la condena⁵.

En auto de 30 de mayo pasado, entre otras, se repuso parcialmente; aunque el a quo reconoció que la sentencia solo condenó a la persona jurídica demandada, pero omitió pronunciarse sobre la responsabilidad del otro demandado (RODRÍGUEZ VERA), por lo que si no se ha desatado ese punto litigioso y no se han impartido obligaciones a cargo de este, no tiene sentido embargar sus bienes.

Así, reiteró el negar el embargo y secuestro, pero como se trata de un asunto declarativo, dijo que procede la inscripción de la demanda, la cual decretó frente a los inmuebles atrás referidos (ver numeral 5°)⁶.

La demandante solicitó adicionar la anterior decisión, en el sentido de indicar si se concede o no la apelación⁷; mientras la demandada interpuso recursos de reposición y en subsidio apelación, señalando que no hay lugar a cautelas dado que la sentencia de primera instancia no atribuyó responsabilidad a RODRÍGUEZ VERA, aunado que la

³ Archivo 58 del cuaderno principal – primera instancia.

⁴ Archivo 61 ejusdem.

⁵ Archivo 63 de igual expediente.

⁶ Archivo 66 del cuaderno principal – primera instancia.

⁷ Archivo 68.

inscripción de la demanda procede con la presentación de la demanda, pues de lo contrario debe prestarse caución⁸.

En providencia del 5 de julio de 2.023⁹ no se repuso, reiterándose los argumentos de cara al embargo, secuestro e inscripción de la demanda; y en cuanto a la caución, sostuvo que es suficiente la otorgada ab initio, la cual derivó del auto del 11 de febrero de 2.021¹⁰.

Posteriormente, ambas partes allegaron escritos reafirmando en sus posiciones procesales¹¹.

Así las cosas, tratándose de un asunto apelable según lo normado por el artículo 321.8 del C. G. del P., se resuelve, previas:

CONSIDERACIONES

El recurso de apelación busca que el Superior estudie el asunto decidido en primera instancia, con el fin de revocarlo o reformarlo, sentido en el cual se dirigirá el siguiente análisis, ello dentro del principio de la limitación que impone el artículo 328 procesal civil.

Sobre las medidas cautelares dispuestas para los procesos declarativos, el artículo 590 del C. G. del P. contiene las reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria; por lo que de cara a los recursos interpuestos, abordaremos su análisis respondiendo si fue o no adecuada la inscripción de la demanda dispensada, o si en su lugar procede el embargo y secuestro en

⁸ Archivo 69.

⁹ Archivos 78

¹⁰ Archivos 01 CUADERNO MEDIDAS CAUTELARES.

¹¹ Archivos 80 y 82

relación a las propiedades que se dijo pertenecen al codemandado RODRÍGUEZ VERA; igualmente, si debe prestarse una nueva caución.

En el proceso declarativo que nos ocupa, el día 2 de marzo de 2.023 se profirió sentencia de primera instancia, la que en su parte resolutive, entre otras, dispuso desestimar las excepciones de mérito formuladas por la parte demandada, y estimar las pretensiones de la demanda principal incoadas por CIRUPLAN S.A.S., pero solamente frente a FOREMP SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.; consecuentemente declaró a esta incumplida, resolviendo el contrato soporte de la acción, y condenándole a restituir a la actora la suma de \$82.482.858.

En tal decisión, no hubo pronunciamiento frente al codemandado RODRÍGUEZ VERA, aunado que se desestimaron las pretensiones de la demanda en reconvención.

Es decir, solo se condenó a FOREMP SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.; sin embargo, en los términos del artículo 302 del C. G. del P., se tiene que tal decisión no se encuentra en firme en relación a la responsabilidad del también demandado RODRÍGUEZ VERA, sin que sea del caso considerar lo decidido en el auto del 7 de marzo 2023 - archivo 49-, pues como atrás se reseñó, el mismo se declaró sin valor mediante providencia posterior.

Si bien el inciso 2º del literal b) numeral 1º del artículo 590 procesal civil indica; *“Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la demanda, y de los que se denuncien como de propiedad del demandado, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquella.”*, tal precepto no es aplicable dentro de las particularidades del asunto que nos ocupa, en la medida que la sentencia de primera instancia no declaró el

incumplimiento contractual o la responsabilidad de RODRÍGUEZ VERA, es decir, la decisión estimatoria con la que cuenta la demandante no deriva condena a cargo de este codemandado.

Entonces como en relación a RODRÍGUEZ VERA no se han emitido obligaciones, ajustada fue el razonamiento del *a quo*. Corolario, la alzada referente a este punto no prospera.

Sin embargo, estando frente a un proceso declarativo, la medida cautelar que procede es la inscripción de la demanda, frente a la cual no se advierte un límite temporal, además que no saca el bien del comercio (inciso 2° artículo 591 C. G. del P.).

Lo anterior debe verse en armonía con el numeral 2° del artículo 590 procesal civil, cuando establece:

“Artículo 590. Medidas cautelares en procesos declarativos. En los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares: (...) “2. Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el demandante deberá prestar caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones estimadas en la demanda, para responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica. Sin embargo, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable, o fijar uno superior al momento de decretar la medida. No será necesario prestar caución para la práctica de embargos y secuestros después de la sentencia favorable de primera instancia. (...)”. Subraya adrede.

Esa norma procesal determina que no será necesario prestar caución cuando exista condena favorable, pero como se dijo líneas atrás, para el efecto tal decisión ha de estar en firme, lo que es ausente en las presentes en relación a RODRÍGUEZ VERA, por lo que para la estimación de la caución, según el transcrito supuesto normativo, será el equivalente al 20% del valor de las pretensiones, pero si en el proceso en estudio ya obra garantía, no es necesaria una adicional.

Revisado lo pertinente, consta en el cuaderno de medidas cautelares el auto del 11 de febrero de 2.021¹², donde se fijó caución frente al pedido cautelar deprecado *ab initio*, misma que fue pagada por la parte actora aportando la Póliza M–100097162, dimanada de la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., en ella se explica que el objeto del contrato es; *“Garantizar el pago de los posibles perjuicios que se causen con la práctica de las medidas cautelares de embargo y secuestro”*. En cuanto a su vigencia, indica que es; *“Hasta que termine la responsabilidad del tomador de la póliza dentro del proceso en el cual se presenta”*.

Conforme a lo expuesto, este punto habrá de reformarse, por lo que previo al decreto de la inscripción de la demanda, la demandante corregirá la garantía prestada, o en su defecto, otorgará una nueva que considere los perjuicios respecto a esa específica cautela y que no está amparada por la Póliza M–100097162, ello en los términos del numeral 2° del artículo 590 procesal civil. El *a quo* calificará su suficiencia y la aceptará o rechazará (artículos 603 y 604 ídem).

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín:

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la negación del embargo y secuestro realizada en el auto del veintiséis (26) de abril de de dos mil veintitrés (2.023), así como en el numeral CUARTO

¹² Archivo 01 Cuaderno Medida Cautelar. Este auto fue proferido por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Medellín, quien inicialmente conoció de esta demanda, bajo el radicado 05001 40 03 007 2020 00950 00, ello hasta el 2 de febrero de 2.022, fecha en la que se remitió a los Juzgado del Circuito por alteración de la competencia (ver archivos 02 del cuaderno demanda de reconvención y archivo 23 en el Cuaderno Principal).

(4°) resolutivo del auto calendado el treinta (30) de mayo de igual año, conforme lo motivado. Sin costas.

SEGUNDO: REFORMAR el numeral QUINTO (5°) resolutivo del auto proferido el treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés (2.023), el cual queda así:

“QUINTO: Previo a decretar la INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA sobre los bienes identificados con las matrículas inmobiliarias 50S-40780388, 50N-20882739 y 50N-20882738 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, la demandante corregirá la caución otrora prestada, o en su defecto, otorgará una nueva que considere los perjuicios respecto a esa específica cautela, en los términos del numeral 2° del artículo 590 del C. G. del P.”.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, vuelva el expediente al Despacho de origen para lo de su cargo.

Notifíquese:



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
MAGISTRADO